

# 1. EL PROCESO ELECTORAL DE 1988

Raúl Trejo Delarbre

UNAM

Parteaguas en la vida contemporánea del país, prueba para todas las fuerzas políticas, indispensable punto de referencia de una nueva presencia ciudadana, eje de diatribas, reclamos, suspicacias e impugnaciones; todo eso y más se ha dicho del proceso en torno a las elecciones mexicanas del 6 de julio de 1988. No hubo fuerza política que no se manifestara a propósito de las jornadas que constituyeron el álgido verano poselectoral y, desde antes, las campañas políticas revelaron un dinamismo que era impensado en la sociedad de este país. Nuevos agrupamientos, recomposiciones, presencias y actitudes que hubieran sido inimaginables unos cuantos meses antes; creciente competitividad de la oposición y notable deterioro del partido gobernante formaron parte de estos episodios.

Entre la abundancia de novedades de aquél proceso electoral destacaron la ubicación del PRI como partido que, conservando el poder político, encontró entonces una disputa mucho mayor, crecientemente competitiva; el establecimiento de la atractiva y heterogénea coalición cardenista; el estancamiento de un panismo que a pesar de que no creció pudo consolidarse regionalmente, así como el deterioro de pequeños y poco representativos partidos políticos. Y junto a esos saldos iniciales puede señalarse una todavía insuficiente pero auténtica renovación de las conductas políticas del electorado mexicano. Más allá de la participación en las urnas —difícil de comparar con otros momentos porque los datos de abstención y participación electoral en otros comicios son poco confiables— pudo apreciarse una creciente atención, de diversos sectores, hacia el proceso político de 1988.

El voto ha sido cada vez más informado o, si se quiere, desinformado. Aunque el conocimiento de plataformas y propuestas políticas siguió resultando precario, los ciudadanos pudieron distinguir entre diversos proyectos

del gobierno, personificados en candidatos muy distintos entre sí. Novedoso y conflictivo, el 6 de julio, con sus variados resultados, tendría efectos también disímboles en la vida política mexicana.

Después de esa fecha se volvió lugar común asegurar que el país sería otro a partir de aquel 6 de julio. Esa fecha condensó afanes de cambio y novedades políticas que se manifestaron a lo largo de varios meses, antes y después de los comicios. Pero, definido sólo a partir de sus rangos potencialmente transformadores, el 6 de julio fue semimitificado como parteaguas definitorio de grandes transformaciones en la vida pública mexicana. Se le ha identificado junto a otras fechas del nutrido calendario cívico de nuestro país aun cuando, a pocos meses de distancia no ha quedado del todo claro cuánto y hasta dónde se avanzó en el desarrollo político, en los comicios y las campañas electorales de 1988. El 6 de julio, bien visto, pudo entenderse como fecha de cambios, pero también de profundización de rezagos e inercias en la política mexicana.

Para presentar algunos aspectos de ese gran mosaico de novedades y reiteraciones que fue el proceso político mexicano en torno a las elecciones de julio, hemos seleccionado quince temas, no necesariamente cronológicos.

### *México en 1988*

Año de cambios anunciados, buscados y perseguidos por diversas fuerzas, pero de cambios no necesariamente consolidados, 1988 fue también de aniversarios significativos. En el primer trimestre del año se cumplieron tres décadas de la violenta derrota del movimiento de los trabajadores ferrocarrileros, varios de cuyos dirigentes pasaron once años en prisión. En octubre se conmemoraron dos décadas del movimiento estudiantil que también terminó de manera trágica con la matanza en la Plaza de las Tres Culturas.

El desarrollo político de México, desde entonces, había comenzado a dejar atrás la antaño virtualmente sistemática persecución contra los disidentes; la represión y la violencia ya no eran recursos constantes del poder, pero no dejaban de ensombrecer distintos esfuerzos de organización social y política al margen de los mecanismos institucionales de participación y control. El régimen monopartidista que, en la práctica —debido a la ausencia de competitividad suficiente por parte de otras opciones políticas— había ejercido el casi sexagenario Partido Revolucionario Institucional, mostraba cada vez mayor desventaja y tenía pocos defensores. Pero el tránsito hacia una forma de gobierno menos vertical no ha dejado de ser difícil, sobre todo debido a las muchas inercias que arrastran la cultura política y la misma práctica política de los mexicanos.

No todos fueron aniversarios dolorosos en 1988. También se conmemoraban cincuenta años de la expropiación petrolera, que fue la prueba de solidez y soberanía que desarrolló el sistema político mexicano durante el régimen del general Lázaro Cárdenas. Ubicado justo a la mitad de las campañas electorales, el aniversario de la expropiación, el 18 de marzo, fue en 1988 motivo de diversas interpretaciones, nostalgias, festejos y apropiaciones. Junto con la revolución de la segunda década del siglo, posiblemente no hay episodio de nuestra historia reciente que suscite tantas pasiones, adhesiones y discusiones, como la expropiación petrolera cardenista. En 1988, en torno al 18 de marzo se libró una clara disputa no por la herencia personal del expropiador del petróleo —de la que evidentemente se benefició su hijo Cuauhtémoc—, sino por el legado político que significaba la tradición reformista, desplegada en la revolución, ratificada en los años treinta y después relegada, pero nunca olvidada ni descartada por las fuerzas políticas más importantes del país. 1938 ha sido memorable también por la participación popular en la que pudo apoyarse la decisión expropiatoria de Cárdenas. Más allá de las discusiones sobre la vigencia o no del populismo, o sobre si esa calificación puede adjudicársele a los años del cardenismo mexicano, la presencia social masiva que se registró en los años treinta no ha dejado de ser punto de referencia insustituible en la política mexicana.

Entre la tradición represiva y la tradición participativa, los electores, y sobre todo los candidatos y sus partidos, hicieron del proceso político de 1988 una ocasión de recomposiciones y expresiones en todos los espacios del sistema mexicano.

Para el gobierno y sus partidos, la campaña y los comicios del 88 fueron un reto al que no podían responder, si deseaban ser eficaces, con los recursos de manipulación, autoritarismo y clientelismo que resultaban habituales en la preservación del régimen político mexicano. El PRI transcurrió esos difíciles meses entre las presiones derivadas de su propia situación interna, y las crecientes presiones de una sociedad inconforme con la crisis económica y disgustada, ahora también, con la precariedad de los espacios de participación e influencia política.

En otros momentos difíciles, el PRI y el gobierno habían podido pelear sin demasiados costos las manifestaciones de desazón social porque, cuando ocurrían, eran casi siempre muy localizadas. Pero ahora, las incontenibles dificultades económicas del país hacían más incómoda la situación de los gobernantes, puesto que las incomodidades de la sociedad eran mayores. Acicateada por errores de gobiernos anteriores, profundizada por la política del gobierno de Miguel de la Madrid, y empeorada por condiciones externas (caída del precio del petróleo, proteccionismo comercial de los Estados

Unidos, incremento constante de la deuda externa, etcétera) la crisis económica mexicana tenía efectos claramente políticos.

Los niveles de bienestar, que hasta los años setenta habían sido históricos, casi constantes, se tradujeron en incertidumbre y, por lo tanto, en disgusto político para la mayoría de los trabajadores mexicanos y sus familias. Al finalizar 1988 se registraba una caída del salario real superior al 40%, en los seis años de gobierno lamadridista. Ese deterioro se aunaba a la erosión salarial acumulada desde, al menos, 1979. Los asalariados, aunque no hicieran cuentas precisas, encontraban que las elecciones de 1988 los sorprendían en medio de un indeseable aniversario más: México cumplía una década de deterioro constante en el ingreso de sus trabajadores. Si añadimos una caída también real del empleo, junto con crecientes problemas urbanos que se sumaban a la ancestral pobreza del campo, nos encontramos con un panorama de previsible tensiones sociales.

Las elecciones de 1988 fueron ocasión para una protesta pasiva, pero notablemente significativa, de millones de ciudadanos que dejaron de votar por el PRI para apoyar, aunque fuera de manera transitoria, a los partidos más significativos de la oposición. Pero también es notable cómo, pese a los escenarios de inevitable catástrofe que anticipaban periodistas extranjeros y politólogos nacionales, el régimen político mexicano tuvo estremecimientos y tropiezos, pero no se desmoronó. Las elecciones siguieron siendo, con todas sus limitaciones y a pesar de una amplia abstención, espacios de mediación y manifestación para los desacuerdos y demandas sociales. Las elecciones de 1988 no fueron únicamente ocasión para que se confrontaran diversas opciones políticas. Más allá de la contienda entre partidos (que no comenzó, ni terminó con las elecciones de aquél año) en esos comicios se expresaron disgustos y advertencias de la sociedad.

Quizá haya que referirse, más bien, a sectores específicos de la sociedad. El voto de protesta, así como la reticencia a confiar en el gobierno se manifestaron sobre todo entre los sectores medios que, después de la estabilidad salarial hasta los años setenta, y luego del auge que resultara de la bonanza petrolera a mediados de esa década fueron comparativamente los más golpeados: de nuevos semirricos a una temida y renovada depauperación. Junto con las clases medias protestaron los asalariados de menores ingresos, porque ellos padecerían más que nadie la erosión de niveles de vida propiciada por la crisis. Pero quienes disfrutaban de un salario seguro, al menos contaban con ingresos fijos.

En todos estos años se han mantenido ejércitos de desempleados y subempleados que son la expresión más patética, y por eso potencialmente explosiva, de la crisis reciente. Pero esos grupos casi nunca están organizados y pocas veces se registran para votar. Así que el sufragio de protesta lo

podemos ubicar entre los electores medios y los trabajadores asalariados de diversos niveles de ingreso. En esos sectores se han encontrado algunos de los principales apoyos tradicionales, y hasta hace poco tiempo constantemente fortalecidos, del Partido Revolucionario Institucional. Allí fue en donde se ubicaron algunas de las rupturas —es difícil precisar qué tan definitivas— en el consenso histórico del PRI. Los trabajadores asalariados y los heterogéneos pero respondones sectores medios, al menos en parte, al adherirse a algún partido de oposición o al votar contra el PRI, recuperaron tradiciones de participación ciudadana que parecían olvidadas: entre otras, tradiciones como las de los sindicalistas de 1958 y las de los estudiantes de 1968.

### *PRI: entre el marasmo y la reforma*

Ningún partido político resultó más afectado en las elecciones de 1988. La indiscutible mayoría que había consolidado el PRI en comicios anteriores, ahora fue objeto de suspicacias y reclamos variados. En términos de los resultados oficiales, que serán la única fuente estable y definitiva de información sobre las elecciones de julio, el Partido Revolucionario Institucional experimentó una sensible caída: en las elecciones presidenciales de 1982 los priístas ganaron, de acuerdo siempre con las cifras oficiales, el 71.72% de los votos. Tres años más tarde, en las elecciones federales para diputados, el partido tricolor ganó el 64.81%. Esta tendencia a la baja se convirtió en el apretado 50.74% que obtuvo el candidato presidencial priísta en julio de 1988.

La disminución en la capacidad del PRI para mantener consenso y voto de los ciudadanos ha sido motivo de especulaciones de lo más diversas. La crisis económica, el desgaste de los cauces tradicionales de participación, la politización de nuevos sectores sociales, y la emergencia de opciones también nuevas de organización partidaria, forman parte del panorama de la creciente debilidad priísta. Además, han influido los conflictos al interior de ese partido, evidenciados por la ruptura que dio lugar a la **Corriente Democrática**.

La designación de Carlos Salinas de Gortari —hasta entonces titular de Programación y Presupuesto— como candidato presidencial del PRI, el 4 de octubre de 1987, precipitó una crisis que ya se avizoraba dentro del más importante partido político nacional. La preeminencia de mecanismos verticales en la selección de candidatos a posiciones de representación popular, así como la creciente subordinación del PRI a las decisiones del Ejecutivo federal, contribuyeron a profundizar una inconformidad de la cual personajes como Porfirio Muñoz Ledo —que había sido presidente nacional del PRI en los años setenta— y Cuauhtémoc Cárdenas —que había sido gobernador de Michoacán, entre otros cargos— se convirtieron en abanderados a fines de

1987. Los partidarios de ese grupo quisieron impulsar la precandidatura de Cárdenas a la presidencia de la república. Sin embargo, sólo consiguieron profundizar el rechazo de la cúpula priísta en su contra. En septiembre de 1987 lo que ya comenzaba a denominarse como Corriente Democrática publicaba su "Propuesta Democrática", que era un programa que rescataba demandas nacionalistas para la reorientación de la economía, el gobierno y la sociedad. Ese grupo aspiraba a influir en la designación del candidato presidencial priísta, pero no tuvo éxito. Inmediatamente después de la designación de Salinas, los miembros de la Corriente Democrática precipitaron su ruptura con el PRI.

El nuevo candidato presidencial, por su parte, inició un discutido y muy promovido proceso de reconciliación entre las fuerzas priístas e, incluso, con otros agrupamientos de la política mexicana. Sostuvo una intensa campaña electoral, durante la cual no sólo reagrupó y movilizó a los efectivos del PRI sino, además, fue esbozando las líneas generales de lo que sería su proyecto de gobierno. Sin embargo, lo que Salinas de Gortari denominó su propuesta de "política moderna", no conseguía entusiasmar a los priístas disidentes, ni desadormecer a los sectores sociales tradicionalmente apáticos respecto del quehacer político. Entre otras, el candidato Salinas de Gortari destacaba como líneas fundamentales en sus discursos de campaña, y luego en sus propuestas de gobierno, tres prioridades: la profundización de la democracia, la atención de las desigualdades sociales y la recuperación de la economía.

Las banderas de campaña de Salinas, —que serían ejes de su programa de gobierno— a pesar de que recuperaban exigencias de grupos sociales mayoritarios, enfrentaban un notable problema de credibilidad. Las prácticas que ante los ojos de la opinión pública han definido al PRI se sobrepusieron, en la imagen de esa campaña, al ideario del candidato presidencial. La rígida estructura del partido —que sus propios militantes han criticado— ha sido poco útil como fuente de consensos e, incluso, pareció volverse en contra de sus candidatos. Durante la campaña de Salinas, y sobre todo después de ella, menudearon las sugerencias para reformar el PRI. De hecho, se llegó a considerar que la modernización de ese partido tendría que ser consustancial a cualquier auténtica modernización de la política mexicana. Uno de los principales rasgos que contribuyen a mantener inercias y autoritarismos en el PRI es su estructura corporativa, fuente de privilegios para los líderes campesinos, obreros y populares, pero no necesariamente de prerrogativas para los militantes de base. Las ineficiencias que se derivan de tal estructura, así como de errores en las selecciones de candidatos y de la misma imagen pública del PRI en algunas zonas del país, propiciaron que este partido perdiera, en especial cuando postulaba a dirigentes poco prestigiados —o de

plano, notablemente desprestigiados—, como era el caso de algunos líderes sindicales.

### *FDN: diversidad, novedad, auge y contradicciones*

La gran novedad del proceso político en 1988 fue la coalición en torno al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Numerosos agrupamientos, habitualmente distanciados entre sí, participaron de la en un principio entusiasta —y, por infrecuente, también desconcertante— alianza política alrededor del ex gobernador michoacano que, por añadidura, es hijo del ex presidente con más prestigio en la tradición nacionalista mexicana.

La coalición neocardenista se constituyó, en todos los sentidos, en una nueva presencia nacional. Geográficamente significó la posibilidad de que grupos de muy diversas dimensiones, entre ellas pequeños núcleos regionales, tuvieran una expresión hacia todo el país. Pero principalmente se trató de un movimiento político que de una u otra forma —y a veces velada o poco clara, pues su programa no era del todo explícito— reivindicaba la fuerte tradición del nacionalismo como palanca para avanzar a transformaciones sociales profundas.

Peró también fue un fenómeno de izquierda. Las izquierdas, casi todas, encontraron en la figura de Cárdenas el caudillo y el motivo unificado de los cuales, por décadas, han carecido en México. En el neocardenismo pudo apreciarse cómo, a pesar de su casi patológica dispersión, las izquierdas habían alcanzado una presencia política relevante y, a partir de las jornadas de 1988, habrían de resultar indispensables en el escenario partidario de nuestro país. Los candidatos presidenciales de ese signo habían tenido una participación más bien testimonial, pero poco competitiva, en elecciones anteriores. En cambio, en 1988, Cárdenas Solórzano alcanzó, como es bien sabido, el segundo lugar en la disputa por la presidencia, pero además la izquierda, con todo y su heterogeneidad, se ubicó también como la segunda opción política del país.

El Frente Democrático Nacional, a pesar de tener una notable diversidad interna y carecer, virtualmente, de estructura organizativa, pudo hacer lo que hasta entonces había sido imposible para casi cualquier otra fuerza política en sesenta años: resultar competitivo frente al PRI. Ese mérito, nada menor, sólo puede explicarse a partir del deterioro que había experimentado el partido gubernamental, como se mencionó anteriormente. Y también, desde luego, contó el potencial esperanzador y la capacidad de convergencia que se desplegaron en torno a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas.

Esa posibilidad de cohesión fue más pragmática que programática. Los

postulados del FDN siempre se presentaron de manera muy amplia, pues sólo a partir de un ideario explícitamente general, con pocas precisiones, los variados grupos de la alianza neocardenista podían comulgar en una plataforma que los reuniera a todos. El trayecto durante el cual coincidieron agrupamientos de la izquierda más radical con otros de una izquierda tan institucional que podía considerársele oficialista, no dejó de ser tan veloz como sorprendente.

Después de la ruptura de Cárdenas y sus más allegados —en la Corriente Democrática— con el Partido Revolucionario Institucional, el ex gobernador se afilió a uno de los partidos políticos más desprestigiados y enmohecidos, el Auténtico de la Revolución Mexicana, que lo postuló como candidato presidencial. Luego se conformó la nueva alianza, con la adhesión de los partidos Popular Socialista —cuyos dirigentes veían consagrada, así, su viejísima aspiración de arribar a un frente nacionalista y antiimperialista— y Socialista de los Trabajadores —encabezado por líderes que, con notable sentido de la oportunidad, inmediatamente le cambiaron el nombre para que se llamara, desde entonces, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional—. Pronto se sumaría una abundante cauda de grupos, a veces con más siglas que presencia política real; los partidos —no registrados— Social Demócrata, Socialista Revolucionario y el Partido Verde, la Unidad Democrática, el Partido Nacional del Pueblo (en Chihuahua), el grupo Fuerza Progresista de México, el Movimiento al Socialismo —impulsado por militantes escindidos del Partido Revolucionario de los Trabajadores— la Organización Revolucionaria Punto Crítico, el Partido Liberal, el Grupo Poliforum, la Asamblea de Barrios, la Asociación Nacional Cívica Revolucionaria, etcétera. En esa colección de grupos estaban presentes prácticamente todos los matices de la muy coloreada gama de posiciones que hay en las izquierdas.

En términos amplios, puede considerarse que en el FDN se manifestaron las dos grandes tendencias que suelen debatirse en el seno de las izquierdas, en torno a la permanente disyuntiva entre estrategias revolucionarias y tácticas reformistas. Muchos grupos pequeños, pero de ánimo y discursos notablemente contestatarios, insistieron en la veta radical del neocardenismo. Otros, sobre todo los partidos registrados —PFCRN, PPS y PARM—, con más experiencia en la contienda política institucional pero sobre todo con mayor vocación por el pragmatismo y la conciliación, pugnaron por una política menos estridente y de logros más pausados. A juzgar por la conducta del FDN y de sus líderes en todo el transcurso de 1988, puede considerarse que en esa coalición prevalecieron las posiciones más radicales que privilegiaban el enfrentamiento por encima de la negociación con otras fuerzas políticas, en especial con el gobierno y el PRI.

A comienzos de junio, cinco semanas antes de las elecciones, el único

agrupamiento de izquierda importante que seguía fuera de la coalición neocardenista, el Partido Mexicano Socialista, resolvió incorporarse al Frente y retiró la candidatura del ingeniero Heberto Castillo Martínez para adherirse a la postulación de Cárdenas. Meses más tarde, el PMS figuraría entre los principales impulsores de un nuevo proyecto organizativo, para dar coherencia a varias de las fuerzas del FDN. Junto con la Corriente Democrática y con el apoyo de varios de los grupos sin registro electoral que participaban en el Frente, Cárdenas se propuso, a fines de 1988, construir el Partido de la Revolución Democrática. Los otros partidos registrados del FDN —PPS, PFCRN e incluso el PARM, al que Cárdenas seguía afiliado— se negaron a incorporarse al nuevo partido. De esta forma se perfilaban dos grandes agrupamientos que, si bien no contradictorios, podían resultar competitivos entre sí: por un lado el FDN, como coalición amplia de centro-izquierda y, de otra parte, el nuevo PRD impulsado, fundamentalmente, por los ex priístas de la CD, los socialistas del PMS y los grupos radicales cuyo espíritu contestatario definió varias de las principales decisiones del cardenismo en esa etapa. Sin la figura de Cárdenas como centro unificador, el Frente Democrático Nacional desapareció en 1989.

### *PAN: de la resistencia civil al tercer sitio político nacional*

Todos los augurios asignaban al Partido Acción Nacional un avance de relevancia en la competencia electoral del 88. Sin embargo, nadie, o casi nadie contaba con la vistosa y eficaz emergencia del neocardenismo. De no ser por el avance de la centro-izquierda, el PAN no sólo hubiera conservado un segundo sitio entre las fuerzas políticas del país —únicamente después del PRI— sino además, podría haber obtenido una votación muy superior a la de otras ocasiones, beneficiándose del descontento ciudadano que, por circunstancias muy peculiares, en esta ocasión fue usufructuado por la candidatura del ingeniero Cárdenas.

Acción Nacional, el partido de oposición con más experiencia institucional en el litigio electoral y en la disputa legislativa, experimentó un serio tropiezo que, sin embargo, no debiera hacer creer que el panismo se encuentra relegado. En elecciones anteriores a las de 1988, el PAN demostró un notable dinamismo, sobre todo en espacios regionales muy delimitados. En el norte del país, los candidatos de ese partido han conquistado importantes alcaldías. En el centro y en la ciudad de México han ganado espacios entre clientelas electorales de clase media o de altos niveles de ingreso. La desconianza respecto de los gobiernos priístas había sido aprovechada por el PAN mejor que por ninguna otra fuerza política. Con un discurso simple, pero

tajantemente antigobiernista, Acción Nacional había logrado extenderse entre los principales núcleos urbanos del país. No fue casual que en la ciudad de México quedara en segundo lugar electoral —pues los partidos simpatizantes de Cárdenas se presentaron por separado en los comicios de julio—.

Acción Nacional libró una fuerte pelea ante la centro-izquierda y ante el PRI, pero tenía que combatir en dos flancos y ya no con un solo adversario como le había sucedido en confrontaciones anteriores. Además, el PAN se encontraba debilitado por fricciones internas que no acabaron de resolverse en el transcurso del 88, y que quedaron pendientes para nuevos momentos. Dentro del PAN se han mantenido, fundamentalmente, dos grandes tendencias. Una, que podría considerarse como tradicional, formada por dirigentes más proclives a la conciliación para afianzar posiciones; otra, que empezó a desplegarse en 1986 cuando se efectuaron elecciones locales en varios estados en el norte del país (y, de manera destacada, en Chihuahua) impulsada por nuevos militantes y por líderes menos avezados en el discurso de derecha moderada, tradicional del panismo pero con mayor vocación para las actitudes impulsivas y belicosas.

Esta última corriente, que ha sido denominada como neopanista, ocupó las principales posiciones en Acción Nacional a partir de 1987. Como dirigente nacional del PAN fue designado Luis H. Alvarez, ex alcalde de Chihuahua —que estuvo en huelga de hambre después de los comicios de 1986—, y la candidatura presidencial fue ganada por Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, singular y bravucón terrateniente de Sinaloa, que había competido por la gubernatura de su estado. El origen empresarial de Clouthier dio un nuevo sesgo al opositorismo del PAN. Este partido se presentó ya no sólo como vocero de las clases medias, antiestatistas y dolidas por la política social y por la política expropiatoria del gobierno. Además, buscó representar a una franja de los empresarios mexicanos.

No lo consiguió del todo porque, pragmáticos y cuidadosos, los principales capitanes de industria del país prefirieron conservar, y aún estrechar, su alianza con el gobierno y con el PRI. Pero indudablemente, la candidatura de Clouthier significó que por primera vez, en varias décadas, la burguesía mexicana contara con dos referentes electorales y ya no sólo pudiera conformarse con apoyar a los candidatos, preferibles por conocidos, del PRI.

Clouthier desplegó una activa y controvertida campaña. Acudiendo a prácticas de resistencia pasiva —y en algunas ocasiones de protesta nada dócil—, recorrió el país y preparó lo que parecía una drástica insurrección civil: ocupaciones de plazas, acordonamientos de edificios municipales, huelgas de hambre y “plantones”, bloqueos de carreteras, cierre de puentes internacionales, boicoteos a medios de información electrónicos e impresos, asistencia a mítines de partidos contrarios y, sobre todo, un peleonero

discurso, programáticamente simplón, aunque para sus clientelas electorales satisfactorio por sencillo y esquemático, articularon la campaña electoral de *Maquío*, como prefería que lo llamaran.

No tuvo todo el éxito que buscaba. No sólo quedó en el tercer lugar de la competencia presidencial; además, la resistencia civil que propugnaba alcanzó poca eficacia, quizá porque a sus simpatizantes les parecían exageradas algunas de estas medidas, o porque había referentes electorales más atractivos, o más competitivos, respecto al PRI. La resistencia civil, que a comienzos de 1988 se perfilaba como una cadena de vistosas y políticamente redituables acciones públicas, acabó siendo poco útil para Acción Nacional. Más que las novedosas tácticas del neopanismo, al PAN le sirvieron las sólidas redes ciudadanas que ha construido callada y eficazmente durante muchos años en colonias, asociaciones vecinales, municipios, barrios, grupos escolares y juveniles, agrupaciones de padres de familia, etcétera. La permanencia de esas redes de acción ciudadana, que son disimuladas en momentos poco álgidos del calendario político, pero que funcionan a la hora de las elecciones, le permitió al PAN lograr triunfos regionales en julio del 88 pero, sobre todo, mantenerse como una fuerte opción partidaria en futuras confrontaciones locales. Paradójicamente, así, la resistencia civil del neopanismo fue menos útil que la oposición ciudadana del panismo tradicional.

### *Los partidos desplazados: PRT y PDM*

La definición de opciones muy claras, a la derecha y en la izquierda del espectro político, tuvo como consecuencia colateral el desplazamiento de los partidos más pequeños. El Demócrata Mexicano y el Revolucionario de los Trabajadores, curiosamente se habían beneficiado con la dispersión y la debilidad de la oposición. Eran grupos pequeños en un panorama en donde no dominaban partidos de influencia significativa, porque no los había. La polarización política de 1988 estableció un bloque de centro-izquierda en torno al FDN, y una derecha moderada, pero fuerte, articulada en el PAN.

El recientemente legalizado sinarquismo —que había accedido a la institucionalidad política de 1979, cuando el PDM compitió por primera vez en elecciones federales— y el neotrotsquismo representado por el PRT —que llegó a la escena electoral apenas en 1982— fueron víctimas de esa consolidación de derechas e izquierdas. En la competencia de 1988 quedaron al margen, incluso desde las campañas mismas. Si las movilizaciones de Clouthier y Cárdenas resultaron al menos en un principio modestas en comparación con las del PRI, los esfuerzos de Gumersindo Magaña y Rosario Ibarra

de Piedra, candidatos pedemista y perretista, respectivamente, eran todavía más exiguos entre otras decisiones de la oposición.

El potosino Magaña desplegó un recorrido nacional casi solitario. Eran muy pocos —nunca más de media docena— los reporteros de medios de información nacionales que le acompañaban, y en varias ocasiones se quejó en público porque consideraba que la dirigencia de su partido lo había dejado solo durante la campaña electoral. Con pocas propuestas, el discurso político de Magaña tuvo como eje el despliegue de posiciones morales y de un poco definido antiestatismo: solidaridad con los pobres, condena a la corrupción y el autoritarismo gubernamentales eran consignas frecuentes en sus mítines y entrevistas. En muchas plazas del país, las reuniones del PDM resultaban tan poco concurridas que, ya al finalizar la campaña, sus organizadores optaron por organizar visitas domiciliarias y a mercados públicos —en donde Magaña, para sorpresa de locatarios y amas de casa, se presentaba a sí mismo sin mayor protocolo— casi únicamente para cubrir el expediente de que había realizado un recorrido nacional. De gran esfuerzo personal, la campaña de este candidato sólo fue redituable en aquellas localidades en donde, por tradición, el PMD ha tenido arraigo, sobre todo en la zona del Bajío.

La señora Ibarra de Piedra, candidata presidencial por segunda vez, fue víctima, junto con su partido, de la convergencia de izquierda en torno al ingeniero Cárdenas. Más que en otras ocasiones, el PRT desplegó un discurso de izquierda radical que no convocó nuevos adherentes y sí, en cambio, alejó a muchos de quienes en otras ocasiones simpatizaron con ese partido, en especial con la defensa de derechos humanos que había desplegado doña Rosario. Además, el PRT experimentó importantes fracturas internas —varios de sus principales dirigentes prefirieron aliarse con el neocardenismo— y así, debilitado, tampoco pudo superar la frontera del 1.5% de la votación nacional que, de acuerdo con la legislación electoral, los partidos requerían para conservar su registro y alcanzar representación en la Cámara de Diputados.

### *Campañas sin interlocutores*

El PRI intentó mantener una difícil posición centrista que lo hacía quedar mal con casi todos; el PAN se ubicó en la derecha moderada; el neocardenismo, en una abigarrada mezcla de centro-izquierdista; el PDM y el PRT, en su marginalidad, exacerbaron sus respectivos radicalismos de derecha y de izquierda... Cada partido político desarrolló campañas nacionales en las que no sólo buscaba el voto ciudadano. Además, parecía que los partidos trataban de definir un perfil frente a sus propias historias y ante las demás opciones políticas.

Procesos ensimismados, las campañas políticas, en lo fundamental, transcurrieron virtualmente aisladas unas de otras. Casi no hubo voluntad, sobre todo por parte del candidato presidencial del PRI, para confrontar e intercambiar ideas. En las campañas presidenciales, en realidad no existía discusión de programas sino, acaso, intercambios de vituperios y señalamientos personales. Cuando se hacía referencia a asuntos políticos, solían repetirse consignas generales, lastimosas quejas o encorajinadas denuncias, pero sin explicar con regularidad la vertiente propositiva. Por convicción testimonial o inhabilidad en la elaboración de ideas, la mayor parte de las campañas resultó repetitiva. Entre fines de 1987 y mediados del año siguiente cambiaron escenarios y aumentó el tono belicoso de algunos candidatos, pero los actos de sus campañas solían ser reiteraciones de lo que ya habían dicho en otras ocasiones.

Cuando había aportaciones ideológicas, o en términos de propuestas nacionales, éstas eran ignoradas, o mecánicamente descalificadas, por el resto de los candidatos. Doña Rosario, encarrilada en la ruta contestataria, descartó, sin examinarlas, todas las posiciones de sus contrincantes. Don Gumersindo parecía que no se enteraba de lo que decían otros candidatos y se refugiaba en su aislada campaña. El ingeniero Castillo, antes de renunciar a su candidatura, seguía anclado en inercias y rencillas internas del PMS pero, sobre todo, rechazaba casi siempre la posibilidad de recuperar el discurso programático de los socialistas y trataba de diferenciarse de Cárdenas, a quien tildaba de oportunista. El ex gobernador michoacano, atrapado también por la heterogeneidad —que era al mismo tiempo novedad y fuente de vitalidad— del FDN, insistió en un discurso político que miraba más al pasado que al desarrollo nacional. El otro ingeniero de la contienda electoral, *Maquío* Clouthier, privilegió la retórica y las acciones agresivas por encima de las propuestas ideológicas del neopanismo que, en lo esencial, sugería la profundización de las desigualdades que padece el país.

La campaña de Carlos Salinas resultaba más abundante en propuestas, aunque, paradójicamente, contaba con un auditorio nacional menos receptivo en vista de la desconfianza social que padecían los priístas. Para remontar esa desfavorable actitud ciudadana, el PRI y su candidato tuvieron que renovar y también trascender la simple retórica. Además, era necesario que Carlos Salinas se mostrara no sólo como aspirante a administrar el poder, sino como próximo presidente de la república. Apoyado por un versátil equipo técnico e ideológico, y buscando dar contenido a su compromiso para modernizar la economía, la sociedad y la política, Carlos Salinas llegó a tener un discurso más complejo que sus rivales.

Empero, el PRI y su candidato tenían que cargar con el desánimo de una sociedad hastiada de conocer y dar credibilidad a promesas que, por décadas,

habían quedado incumplidas. Además, el hecho de haber sido influyente corresponsable en el diseño de una política económica impopular y no del todo exitosa, contribuía para demeritar las propuestas del ex secretario de Programación y Presupuesto. La crisis de la economía se añadió, así, al desgaste de la política, y ambas profundizaron la erosión en la capacidad de consenso priísta.

La actitud desconfiada y anticipadamente impugnadora de los candidatos de oposición, también contó para crear una suerte de parcial vacío ciudadano ante las elecciones. Durante toda la primera mitad del 88, los partidos de oposición insistieron en denuncias, no siempre bien documentadas, sobre un inminente fraude electoral. Así, los ciudadanos quedaban sin opciones satisfactorias: el PRI ya no era atractivo para muchos de ellos, pero si de cualquier manera habría trampa —según aseguraban otros partidos—, entonces, ¿para qué acudir a las urnas? Tal escepticismo acabaría por perjudicar a todos los partidos, no sólo al del gobierno.

Por eso, aunque fue abundante en documentos y discursos que hubieran merecido un análisis crítico riguroso, la campaña de Salinas tuvo un bajo perfil político; y lo mismo sucedió con las campañas de oposición. Además, el PRI rechazó, sistemáticamente, la posibilidad de un debate entre los candidatos presidenciales. A pesar de que se presentaron varias iniciativas, algunas de las cuales tendían a garantizar una discusión respetuosa, pública, y en ese sentido esclarecedora de posiciones y útil para los electores, los dirigentes de la campaña priísta consideraron que al debatir con sus oponentes, Carlos Salinas les reconocería una capacidad de competencia que en su opinión no tenían. Se equivocaron, porque en una discusión abierta podrían haber convencido —o al menos se hubieran conocido, en contraste con el vacío propositivo de los otros partidos— las iniciativas del entonces candidato priísta, que además tiene fama pública de polemista inteligente. También se equivocaron porque, como se demostraría en julio, los dos principales agrupamientos de la oposición contaban con representatividad social suficiente para ser reconocidos como legítimos e indispensables interlocutores por el partido gubernamental.

### *Tensiones y confrontaciones*

Campañas y competencia electorales constituyeron el principal momento de enfrentamiento político que México había vivido en muchos años. Pero además, ocurrieron en circunstancias especialmente conflictivas que sólo enumeramos, pero que tenían sus propios ritmos, razones y rasgos.

Las dificultades de la economía fueron el principal telón de fondo de la

competencia electoral. Diez años después de iniciada —cuando hacia 1978, la economía mexicana comenzó a deteriorarse, luego de una efímera y deslumbrante bonanza, fruto del auge petrolero— la crisis seguía siendo fuente de agobios y disgustos para los mexicanos. Aunque había logrado controlar sus principales causas, el gobierno lamadridista no pudo doblegar la crisis económica. El último, y a la postre fructífero pero limitado esfuerzo en esta materia, fue el Pacto de Solidaridad Económica que el presidente Miguel de la Madrid estableció en diciembre de 1987 y que se prolongaría durante todo un año. Aunque fue presentado como paradigma de concertación entre las fuerzas productivas, lo cierto era que el PSE había sido diseñado, dispuesto e impuesto por el gobierno federal. Los representantes de campesinos y obreros y, por otra parte, los dirigentes empresariales, simplemente convalidaron, con su firma en ocasiones forzada, las sucesivas fases del Pacto durante todo 1988. El gobierno ejercía, de esa manera, su rectoría sobre el rumbo económico, pero quedaba cancelada la muy anunciada participación de los sectores productivos en la planeación del desarrollo. Gracias al PSE se logró una relativa pero constatable estabilidad económica y, sobre todo, la inflación pudo ser abatida, de un aproximadamente 150%, a menos del 40% anual. Para los últimos meses el aumento de precios era incluso menor al uno por ciento. Pero, al mismo tiempo, el crecimiento productivo estuvo casi estancado (aunque por primera vez hubo una pequeña tasa positiva de desarrollo económico). Ese programa de ajustes sacrificó ganancias empresariales —sobre todo de pequeños y medianos productores, pues los grandes negocios tuvieron opciones en la exportación o se beneficiaron con distintos apoyos gubernamentales— pero, más que nada sacrificó al ingreso social.

Los salarios casi no experimentaron alzas. El propio gobierno reconocería que, en el transcurso del sexenio lamadridista, la caída real en los ingresos de los trabajadores había sido casi del 40%, aunque otras evaluaciones ubicaban esa cifra en un 50%.

Era evidente que la *concertación* forzada propiciaría disgusto, lo mismo entre industriales y comerciantes que entre los asalariados, y que esa desazón tendría efectos electorales. Además, el programa de estabilización inflacionaria no tocó otros asuntos fundamentales de la economía. La deuda externa siguió siendo piedra de toque, pero al mismo tiempo compromiso gubernamental inmodificado en la discusión sobre el desarrollo nacional. Todos los partidos, incluso el PRI, mencionaban en sus plataformas electorales la pertinencia, o la urgencia, según fuera el caso, de encarar el asunto de la deuda con medidas que iban desde la renegociación cuidadosa y pausada hasta la moratoria drástica y definitiva. El gobierno, sin embargo, continuaría pagando igual a los acreedores extranjeros (hasta que, en julio de 1989, Carlos Salinas pudo anunciar una renegociación de la deuda).

Las presiones económicas se tradujeron, de manera inevitable, en tensiones sociales. No estallaron muchas huelgas, porque a comienzos del sexenio —entre mayo y julio de 1983— los sindicatos habían experimentado dolorosos fracasos cuando sus reclamos de aumentos salariales —que en algunos casos fueron respaldados con suspensiones de labores— tropezaron con una dura, ortodoxa, política económica gubernamental. Pero en algunas áreas, la misma aplicación de esa política propició cierres de empresas y despidos de trabajadores que se aunaron al cuadro de disgusto social. (En Aeroméxico, por ejemplo, una huelga de personal de tierra desembocó en la decisión gubernamental de vender la empresa, que era propiedad del Estado. Finalmente se optó por liquidarla, con drásticos recortes de personal, aunque el gobierno mantuvo una significativa influencia en ella).

### *La derecha política: empresarios e Iglesia*

En el plano electoral, el proceso político de 1988 significó el fortalecimiento de un nuevo y desafiante polo de centro-izquierda. Pero los espacios de la política mexicana no se reducen a la competencia por los votos. La disputa complementaria, que consiste en la competencia por posiciones de poder —y que no está distanciada del regateo por el consenso social— tuvo otros actores, junto con los partidos políticos. En esa otra confrontación descollaron agrupamientos de lo que podríamos denominar como la derecha política y social.

Grandes grupos empresariales, sin que puedan ser calificados en términos tradicionales como de abierta militancia conservadora sí buscaron, muchas veces con éxito, mantener privilegios. De hecho, si algún sector pudo considerarse favorecido por las políticas —o la ausencia de ellas, en algunos casos— del gobierno lamadridista, fue el de los grandes empresarios y comerciantes. Los más poderosos incursionaron además en la muy redituable especulación financiera que ocurrió en las casas de bolsa en 1987. Esos grupos, en términos monetarios muy poderosos, aunque pequeños en términos de sus integrantes, tenían abundantes motivos para desear una política de continuidad económica en el siguiente gobierno. Entendieron que, para ello, les convenía tener acceso a una cada vez mayor presencia política.

Los empresarios siempre han hecho política en México, aunque nunca en forma tan abierta como ocurrió a fines de los años ochenta. En su expresión más conocida, por medio de sus dirigentes nacionales, las cúpulas empresariales mantuvieron una actitud agresiva, tanto en constantes campañas publicitarias —en las que se ponderó la libre empresa—, como en habituales y no siempre afortunadas declaraciones de sus principales líderes. Poco después de las elecciones federales de 1988, el presidente del Consejo Coordinador

Empresarial, Agustín Legorreta, aseguraba, más desafiante que indiferente a los reclamos sociales, que los trabajadores y sus familias podían vivir bien con el salario mínimo que, para entonces, era de 8 000 pesos diarios. Afirmaciones como ésa causaron frecuentes polémicas en las que, más allá de los saldos momentáneos que tuvieron, se puso de manifiesto la importancia de los dirigentes patronales como actores privilegiados, imprescindibles, de la vida política nacional. El mismo señor Legorreta aseguró que las decisiones auténticamente importantes para la vida económica nacional eran tomadas por un grupo de 300 hombres de empresa, de los cuales, por supuesto, él se postulaba como representante.

Junto con los dirigentes patronales —a quienes no habría que confundir con pequeños y medianos empresarios y comerciantes— destacaron los dirigentes nacionales de la Iglesia católica. Igual que aquéllos, los líderes eclesiásticos habían acostumbrado tener una participación poco vistosa —y en ocasiones virtualmente secreta— en la política mexicana. A diferencia de otros países, en México hasta hace poco era imposible pensar que un funcionario empresarial llegara a ocupar posiciones importantes en el gobierno; también era inusitado que la jerarquía de la Iglesia participara de manera abierta en los grandes debates políticos. Esas fueron algunas de las costumbres políticas que, más allá de su pertinencia o no, se rompieron en la coyuntura electoral de 1988.

Un sector de la dirigencia católica había tenido activa presencia en las elecciones de 1986 en los estados norteños. La influencia de los sacerdotes volvió a manifestarse en sitios como Chihuahua, con una fuerza que casi no se había visto en México desde el conflicto Estado-Iglesia en los años veinte y treinta de este siglo. Esa prueba de fuerza permitió a las cúpulas eclesiásticas asegurar cauces de negociación —y presión— con el gobierno. Durante 1988 fue casi inexistente, pues nadie pensó en hacer cumplirla a la fuerza, una disposición del Código Federal Electoral que imponía penas corporales a los sacerdotes que hicieran política. Pero además, la dirigencia de la Iglesia estuvo en condiciones de exigir, ya a fines del año, una nueva situación jurídica que, de concedérsele, rompería con el histórico equilibrio mexicano entre un Estado que no se inmiscuye en los asuntos financieros ni en la influencia espiritual de la jerarquía católica, a cambio de que ella no participe en forma abierta en los asuntos mundanos del quehacer político.

Como quiera que sea, la Iglesia, y quienes la encabezan, son parte de la sociedad mexicana, y diversas formaciones políticas —desde luego partidos como el PAN y el PDM, pero también agrupamientos socialistas y comunistas— consideraron que debía llegarse a un nuevo trato entre poder político y poder eclesiástico. Esta fue una de las grandes discusiones paralelas al diferendo poselectoral (y como parte de ella, incluso, se llegó a proponer que los

sacerdotes pudieran votar y competir para cargos de elección popular, atribuciones que desde la reforma del siglo XIX tenían vedadas en México). El nuevo gobierno, como señal de acercamiento o de pluralidad, según se vea, invitó a la toma de posesión, el primero de diciembre, a varios funcionarios eclesiásticos. Esa decisión fue álgida y largamente discutida.

### *No reformar, sino devastar*

Las elecciones son procesos políticos ubicados en marcos institucionales muy claros. Las leyes electorales pueden ser discutibles —y en México, habitualmente han resultado parciales en beneficio del partido gubernamental y sus candidatos—. Pero en cuanto constituyen grupos no mayoritarios, puesto que si lo fueran se encontrarían en el poder, los partidos de oposición no tienen más remedio que aceptar y defender el cumplimiento de esa legalidad electoral.

La otra opción sería proponerse el rompimiento del régimen político imperante. Esa alternativa suele estar reñida con los procesos electorales, pero no deja de ser vistosa y tentadora para quienes se enfrentan a un partido de tan añeja permanencia en el poder, y de tan conocidos rasgos autoritarios, como ha sido el Revolucionario Institucional.

Los partidos y grupos de oposición, lo mismo a la izquierda que a la derecha del PRI, aun compitiendo en el plano electoral, han padecido esa tentación con gran frecuencia. Durante el proceso político del 88, el candidato de Acción Nacional casi llegó a hacer costumbre sus referencias a la destrucción del sistema político que, insistía, “se encuentra al borde del despeñadero; lo único que falta es darle una empujadita y para eso estoy yo”. Con similar vocación de enfrentamiento, Cuauhtémoc Cárdenas y sus allegados insistieron, antes y después de las elecciones, en descalificar, de manera tajante, a los gobiernos priístas. Incluso después del 6 de julio sostuvieron que la presidencia de Carlos Salinas sería ilegítima, por lo que no pactarían con él. Esa fue la principal bandera política del neocardenismo en la segunda mitad de 1988.

Actitudes así de polarizadas son frecuentes en todo sistema político en donde, después de varias décadas de régimen de partido único, se desarrollan difíciles trayectos hacia condiciones de mayor pluralidad. En México había poca costumbre de confrontación pública, por eso las actitudes del PAN y del FDN resultaron llamativas y hasta desconcertantes en algunos momentos. Como parte de la competencia política, las descalificaciones mutuas son casi naturales entre dirigentes y grupos que disputan posiciones entre sí.

En la circunstancia mexicana del 88, ese rango en la confrontación fue

publicitariamente atractivo, aunque es difícil considerar que además haya resultado provechoso para el desarrollo de la cultura política mexicana. Al descalificar, sin matices ni explicaciones a sus oponentes, los candidatos presidenciales más belicosos confundían a los electores, como ya se indicó, y empobrecían el debate. Por su parte, el PRI, y sus candidatos y dirigentes también se involucraron en esa competencia de descalificaciones pero con mayores recursos. Entre otras consecuencias, esa actitud significó que por instrucciones del gobierno federal —y a veces por indicaciones directas de la dirigencia priísta, en una poco civilizada confusión entre gobierno y partido— los medios de comunicación, y en especial la televisión y la radio, estuvieran en buena medida cerrados a las opiniones y demandas de los partidos de oposición. Los medios electrónicos contribuyeron a una suerte de ensimismamiento priísta que acabó por perjudicar tanto a ese partido como a los propios órganos de difusión: al aparentar que casi no había presencia nacional de la oposición, la televisión y la radio —y en menor medida la prensa— perdían credibilidad y no eran útiles ni siquiera para propalar y reforzar los mensajes del partido gubernamental. Al imponer un estilo de información y propaganda así de unilateral, el PRI consolidaba su fama pública de autoritario y reacto a la democracia.

### *Trampas, confusiones y violencias preelectorales*

Las elecciones de 1988 fueron las más vigiladas en la historia reciente de México, y al mismo tiempo, las más condicionadas por una extendida desconfianza social.

Los partidos, como ya se indicó, influyeron en ese desánimo ciudadano que acabaría por expresarse, pese a todas las previsiones, en una abstención muy cercana al 50% de los electores registrados. Al mismo tiempo, el insuficiente cuidado que las autoridades encargadas de los asuntos electorales pusieron en la organización de los comicios y en la información sobre ellos, también contribuyó a las suspicacias sobre la legalidad y claridad de la confrontación de julio.

Nunca, como en esa ocasión, los partidos políticos habían tenido posibilidad de participar en la revisión del padrón electoral. Sin embargo, la complejidad y las dimensiones del registro de votantes superaron la capacidad de análisis de los partidos de oposición, que casi no presentaron objeciones al padrón que elaboró el gobierno. Más tarde, diversos litigios en torno a la organización de los comicios profundizaron protestas y, así, documentaron la desconfianza de significativos núcleos de ciudadanos. Pocas semanas antes de julio, por ejemplo, el FDN denunció una presunta impresión ilegal de

boletas electorales en un pequeño taller de la ciudad de México. La Secretaría de Gobernación declaró que allí se editaban boletas para elecciones locales, y no federales como se había supuesto, e insistió en que esa acción no era ilegítima. Nunca se demostró con claridad que tal impresión fuera violatoria de la legalidad electoral, pero con esa simple y muy publicitada denuncia bastó para que la oposición —y con ella, muchos de sus simpatizantes— confirmara algo de lo que, anticipadamente, estaban seguros: que el gobierno preparaba un amplio fraude electoral.

Por otra parte, actitudes rígidas por parte del poder político contribuyeron a fortalecer esa creencia de autoritarismo e incluso manipulación electorales. Cuando el candidato presidencial del PMS, el ingeniero Castillo, declinó en beneficio de Cárdenas, la Secretaría de Gobernación argumentó distintos pretextos y se negó a imprimir las boletas electorales en donde aparecían ambos candidatos. La renuncia de Castillo pudo considerarse como tardía en términos políticos, pero estaba dentro del plazo legal, y técnicamente, según demostró su partido, aún había tiempo para que en las boletas de la elección presidencial el ingeniero Cárdenas apareciera postulado por el PMS. No ocurrió así.

Episodios como éstos mostraron, aparte de equivocaciones circunstanciales, insuficiencias de la legislación electoral federal, que había sido modificada apenas en diciembre de 1986. No en balde la exigencia de cambios a dicha legislación fue uno de los pocos aspectos en los que después de julio de 1988, como principio de un proceso de reforma política posiblemente más amplio, coincidieron todas las fuerzas, incluso el PRI.

Además, en la confusión y desconfianza ciudadanas influyó un innecesario y a la postre contraproducente triunfalismo por parte del PRI y sus dirigentes. Varios líderes de ese partido llegaron a asegurar que obtendrían más de 20 ó 22 millones de votos, o 65 y hasta 70 por ciento de los sufragios del 6 de julio. Esa podía considerarse como algo más que una balandronada para impresionar a los contrincantes, o más incluso, que ingenua meta de la campaña electoral priísta. Podía convertirse, y en algunos estados de la república así ocurrió, en virtual invitación para que gobernadores, dirigentes sectoriales, líderes gremiales y caciques regionales, buscaran hacer trampa en las elecciones con tal de satisfacer aquellas expectativas.

En otro plano del clima de confusión que precedió al 6 de julio, y sin identificarlo necesariamente con los responsables de equivocaciones legales e institucionales antes mencionadas, puede incluirse el despliegue de varias acciones de violenta y criminal provocación.

El encono entre militantes de distintas filiaciones llegó a provocar enfrentamientos, que en el marco de las campañas nacionales resultaban más bien aislados. Pero en más de una ocasión y con orígenes que no acabaron de

quedar claros se produjeron, incluso, asesinatos. La noche del 2 de julio, a casi 72 horas de las elecciones, fueron asesinados el coordinador electoral de la campaña de Cárdenas, Francisco Xavier Ovando Hernández, y su asistente, Román Gil Heraldez. Todos los partidos y candidatos, incluyendo al PRI, condenaron ese atentado que, sin embargo, no fue esclarecido, y que dio a la víspera electoral un tono de incertidumbre e indignación. Otros dos hechos avivaron la sensación de desestabilidad que siguió a las elecciones. El 23 de julio en Ciudad Juárez fueron asesinados la periodista Linda Bejarano y su esposo; ella era dirigente local del PAN, y al parecer el crimen fue responsabilidad de agentes judiciales. Posiblemente tuvo el mismo origen la muerte de cuatro jóvenes, —uno o dos de ellos simpatizantes del cardenismo— la noche del 20 de agosto, en la ciudad de México.

### *Una tranquila pero controvertida jornada electoral*

Precedida por signos ominosos, pero condicionada por la expectación que habían despertado las campañas, la jornada electoral del miércoles 6 de julio de 1988 fue menos conflictiva de lo que se esperaba, menos participativa, y también de una significación mayor a la que podía haberse previsto.

Sólo se reportaron pequeños incidentes en el transcurso de las diez y en algunos casos hasta veinte o más horas que permanecieron abiertas las urnas. En todo el país, y en especial en las áreas de mayor concentración urbana, se presenció una asistencia masiva de votantes. Sin embargo, después de ese día pudo comprobarse que había una abstención cercana al 50 por ciento. En anteriores comicios federales, según los datos oficiales la participación había sido mayor, aunque en esta ocasión a simple vista podía constatarse una presencia ciudadana más abundante. Eso significaba una sola cosa: que en otras elecciones los datos, al menos los relativos al número de ciudadanos que votaban, no habían sido exactos. Entre muchas otras cosas, la jornada electoral de aquel 6 de julio fue la primera, en la historia contemporánea de México, en arrojar cifras de participación verificables por los partidos.

En materia de números también se constataron grandes insuficiencias. Apenas un día anterior, el director del Registro Nacional de Electores, José Newman, había asegurado que la misma noche del 6 de julio se tendrían resultados preliminares de las votaciones. No lo hubiera hecho. En las últimas horas del miércoles 6, en la Secretaría de Gobernación —dependencia responsable de la organización electoral— tuvo lugar el comienzo de una compleja y poco documentada labor de verificación de las cifras por parte del PRI y el propio gobierno. Todo indica que la votación en favor de Cárdenas fue mayor de lo que se esperaba en los círculos oficiales y, por eso, los

operadores gubernamentales encargados de las elecciones tuvieron que demorar la entrega de los resultados.

La explicación gubernamental, tan increíble como conocida y multicommentada, indicó las dificultades que encaró el poder político para reconocer el nuevo panorama electoral del país: “se cayó el sistema”, se dijo la noche del 6 de julio, pretextando que había desperfectos en las líneas de transmisión que alimentaban las computadoras de la Comisión Federal Electoral. Los auténticos desperfectos habían ocurrido, pero no ese día, sino desde tiempo antes, en la capacidad de representación del sistema político y, en particular, del partido gobernante.

Por eso, el 6 de julio, más allá de las cifras, pero también debido a ellas, marcó novedades insoslayables en la política mexicana. La primera de ellas, que el candidato presidencial priísta habría de reconocer dos días más tarde: se avecinaba el fin de la era de partido único que había vivido nuestro país. Hay “una nueva realidad política de la nación”, dijo Salinas, quien al mismo tiempo que se proclamaba como ganador de la elección presidencial, anticipaba que su partido había sufrido más retrocesos que nunca antes en el plano electoral.

Junto con la declinación —pero no necesariamente derrota— priísta se constataba la emergencia de nuevas fuerzas políticas que atendían a una nueva pluralidad, y que desde entonces pelearían en nuevas condiciones ante el PRI. Se trataba de una oposición con suficiente historia y arraigo para representar a segmentos importantes de la sociedad, pero aún determinada por un afán antigubernamental que difuminaba principios y proyectos entre derechas e izquierdas. La misma noche del 6 de julio, tres candidatos presidenciales de la oposición, Clouthier, Cárdenas e Ibarra de Piedra —sólo faltó Magaña, que no quiso participar de esa inopinada alianza— protestaron ante el secretario de Gobernación por lo que consideraban abundantes anomalías que ponían en riesgo toda la validez del proceso electoral y anunciaron que no estarían dispuestos a reconocer a las autoridades que surgieran de los comicios de ese día.

Encarrilada así la oposición, en una política de enfrentamiento drástico, su contraparte priísta tampoco se mostraba conciliadora. La madrugada del 7 de julio el presidente del partido tricolor, Jorge de la Vega, aseguró que el PRI había ganado por amplio margen. Para esas horas, en realidad ningún partido contaba con elementos suficientes para hacer declaraciones tajantes. Ese apresuramiento, que buscaba cosechar en el río revuelto de la incertidumbre poselectoral, sólo contribuyó a crear mayor confusión.

Las protestas de la oposición, junto con el triunfalismo priísta —muestras, ambas, de inseguridad en las posiciones de todos los partidos— continuarían durante varios meses. La veta antiinstitucional de la izquierda se profundizó

cuando Cárdenas aseguró, pero sin citar pruebas ni fuente alguna, que había sido él, y no Salinas, quien había ganado la elección. El candidato del FDN insistió, incluso, en que su información provenía de círculos gubernamentales, y amagó con considerar, si no se reconocía su triunfo, que el PRI habría perpetrado un “golpe de Estado técnico”. El énfasis denunciatorio de Cárdenas, y la pronta evidencia de que aun cuando no pudiera comprobarse que había ganado la elección nacional, en algunas zonas del país sí había obtenido mayoría, consolidaron al FDN como la segunda fuerza política, en perjuicio del PAN. La peleonera imagen de Clouthier se fue apagando cuando se comprobó que la centro-izquierda había desplazado al neopanismo.

Las semanas posteriores al día de las elecciones conformaron uno de los periodos de mayor intensidad política —cercana a la crisis— que el país haya vivido en varias décadas. El PRI y su candidato presidencial consiguieron sortear las dificultades inmediatas, merced a una contradictoria y riesgosa —pero a la postre eficaz— combinación de concesiones al realismo, junto con apelaciones a la institucionalidad del proceso electoral. Después de complejas negociaciones en las cúpulas del poder entre quienes pugnaban por aceptar una cerrada victoria de Salinas, y quienes, en una perspectiva de dureza política, insistían en proclamar un triunfo por amplio margen, los líderes del PRI y el gobierno coincidieron en admitir un avance de la oposición que dejaba a ese partido apenas con poco más de la mitad de los votos. Salinas aseguraba la presidencia de la república y su partido se reservaba la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero al mismo tiempo ese cuerpo legislativo estrenaría una nueva y desafiante pluralidad porque, en conjunto, los partidos de oposición ocuparían el 48% de las 500 curules.

### *Los resultados, en cifras*

Las cifras del 6 de julio fueron motivo de una polémica nacional condenada a quedar sin solución. El debate no se circunscribió a los números, pues estaba condicionado por las expectativas de cada partido y candidato, de tal suerte que los argumentos sobre la claridad electoral fueron matizados por los deseos, enconos y animadversiones mutuas de los protagonistas de la confrontación en las urnas. Además, la discusión había quedado limitada por el triunfalismo de los principales dirigentes y candidatos. Ante la postura del líder nacional priísta, para quien desde la madrugada del 7 de julio era indiscutible que su partido había arrasado en las urnas, había un maximalismo similar —sólo que desde la oposición— por parte del FDN. El ingeniero Cárdenas incluso llegó a decir: “Nuestra lucha no es por las cifras, con ellas no vamos a demostrar el fraude”. Pero, en los simples aun que clarificadores

términos de los datos electorales, la centro-izquierda no tuvo elementos para demostrar que Cárdenas había ganado, como los líderes del FDN y ese candidato aseguraban. El PAN, a su vez, pese a que contaba con un centro de cómputo muy moderno, no hizo públicos los datos que a su juicio eran verosímiles. En estas circunstancias, y apabulladas por las denuncias sobre un presunto fraude, las cifras oficiales a las que el PRI se allanó defendiéndolas, pues avalaban su triunfo presidencial, nunca resultaron del todo confiables.

Pero no hay otras cifras, en términos de la votación nacional. Según los datos de la Comisión Federal Electoral que luego serían ligeramente ajustados por los Colegios Electorales de las Cámaras de Diputados y Senadores, éste fue el saldo del 6 de julio:

En la elección para presidente de la república, el PRI, con Carlos Salinas de Gortari como candidato, obtuvo 9 millones 641 329 votos, que representaron el 50.36% de la votación. En segundo lugar, los partidos que postularon a Cuauhtémoc Cárdenas recibieron 5 millones 956 988 votos (31.12%). Al PAN, con Manuel Clouthier, le fueron acreditados 3 millones 267 159 votos, que significaron el 17.07%. Gumersindo Magaña, del PDM, obtuvo 199 484 (1.04%) y Rosario Ibarra, del PRT, 80 052, que significó el 0.42%.

En la elección presidencial, incluyendo casi 700 mil sufragios anulados, votaron 19 millones 801 218 personas. El padrón electoral era de 38 millones 74 mil 926 ciudadanos que, de acuerdo con el Registro Nacional respectivo, equivalía al 87.13% del total potencial de electores estimado para todo el país. Es decir, el 6 de julio fue a votar el 52% de los ciudadanos registrados con ese fin. Pero como en las listas de electores no estaban todos los mexicanos con derecho a votar, puede considerarse que únicamente acudió a las urnas el 44% de los ciudadanos.

En la votación para diputados las cifras oficiales fueron muy similares, excepto porque los sufragios priístas disminuyeron ligeramente, hasta quedar un poco abajo de la mitad del total de votos: 49.29%. Acción Nacional obtuvo el segundo puesto, con un 17.41%, pues aquí los resultados debían computarse partido por partido, y los integrantes del FDN se habían presentado por separado, no como coalición. Así, los porcentajes de esos partidos fueron: 9.06% el PFCRN; 8.89% el PPS; 5.98 el PARM y 4.31 el PMS. El PDM obtuvo 1.30% y el PRT, 0.47%. Sumadas las diputaciones que obtuvieron por mayoría, junto con las de representación proporcional, o de minoría, la distribución de curules quedó de la siguiente manera: 260 el PRI; 101 el PAN y 139, en conjunto, los partidos del FDN.

La Cámara de Senadores por primera vez recibió a representantes que no habían sido postulados por el PRI. Este partido se quedó con 60 escaños y el FDN ganó cuatro senadurías, las de Michoacán y las del Distrito Federal.

En las elecciones de 1988 también se designó, por primera vez, a la

Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Integrado por 66 asambleístas, ese nuevo organismo de deliberación y reglamentación quedó con 35 miembros del PRI, 18 del PAN y 13 de los partidos del FDN.

### *Novedades políticas: contrapesos al Ejecutivo*

El panorama político mexicano cambió en 1988, pero no sólo debido a los resultados electorales, también debido al nuevo funcionamiento de órganos como el Poder Legislativo y a la incorporación de espacios como la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. El partido gubernamental conservó la mayoría en las cámaras, pero éstas se perfilaron como foros de confrontaciones hasta entonces inéditas y de disputa mucho más acentuada para próximas elecciones. Por lo pronto, el gobierno estaría imposibilitado para disponer —como antes lo hacía con toda comodidad— reformas a la Constitución, pues sólo son posibles con el asentamiento de por lo menos dos terceras partes de los miembros del Congreso. Con la composición que resultó de las elecciones del 6 de julio, cualquier partido que deseara promover modificaciones constitucionales debería lograr acuerdos con otros grupos parlamentarios.

La primera prueba para la nueva composición del Poder Legislativo fue la calificación misma de las elecciones. Esta, merced a la Constitución y a la costumbre política que han prevalecido en México, corre a cargo de los propios legisladores. Sin embargo, las dificultades que entre agosto y septiembre de 1988 experimentó el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados llevaron a pensar en que, para las nuevas circunstancias de México, la autocalificación no era el mejor recurso político. Durante tortuosas y enconadas sesiones, los entonces inminentes legisladores, que primero calificaban su propia elección y luego la del presidente de la república, protagonizaron debates muy publicitados en donde la confrontación de ideas no fue el recurso más socorrido. Los reclamos a gritos, los pleitos por y en la tribuna, los vituperios y reproches resultaron frecuentes en las sesiones del Colegio, y después, en la LIV Legislatura. Estos son procedimientos habituales en el debate parlamentario en muchos países y era previsible que, apenas consolidada la nueva pluralidad política mexicana, las cámaras legislativas fueran escenario de apasionadas trifulcas. Sin embargo, a menudo la confrontación entre grupos parlamentarios se quedó en los recursos formales tras los que, por lo general, no había planteamientos ideológicos o políticos suficientemente claros y sólidos.

Con todo, el nuevo equilibrio de la Cámara de Diputados y la presencia inédita de la posición en la de Senadores, junto con el inicio de trabajos de la

Asamblea del DF —considerada apenas un primer paso en un proceso de democratización más amplio para el gobierno de la capital del país— significaba que había nuevos espacios para que se procesaran, precisaran y resolvieran las diferencias políticas. En especial, ese juego de fuerzas implicaba menos discrecionalidad en la hasta entonces habitual capacidad del Poder Ejecutivo para disponer el rumbo económico y político del país. El presidencialismo, que obedece a complejas e históricas causas, comenzaba a tener, ante sí, interlocutores más sólidos y que por ello le resultaban menos dependientes.

Los nuevos o renovados contrapesos ante el Ejecutivo fueron, por supuesto, expresión de la diversidad social que en 1988 ganó presencia en la política institucional. Otros foros de manifestación de la sociedad también se constituirían en poderes que de hecho significarían, en una u otra dirección política, interlocutores no incondicionales del poder presidencial. El surgimiento de asociaciones de colonos, grupos juveniles y feministas, agrupaciones académicas y profesionales y núcleos de ciudadanos en torno a asuntos de interés común muy específicos (ecologistas, estudiantes, etcétera) ha formado parte de esa creciente heterogeneidad social que se articula de manera orgánica. No sería remoto que incluso dentro del partido político gubernamental, esa diversidad se expresara de manera abierta y hasta agitada. Por su supeditación política, y aun financiera y funcional respecto del poder presidencial, el PRI había sido, en términos amplios, un espacio de expresión social efectiva, pero restringida. Sin embargo, para recuperar competitividad social y electoral, ese partido tenía la necesidad —experimentada, realmente, por el resto de los partidos— de ganar una mayor vida interna. Eso significa menos subordinación al gobierno y, en tal forma, creciente posibilidad para funcionar ya no como comparsa, sino en las nuevas circunstancias, también como contrapeso (ora para apoyar, pero a veces también para discrepar) del poder gubernamental.

### *Sistema de partidos: opción de tránsito democrático*

El proceso político de 1988 mostró que, aun con desconfianza, en la sociedad mexicana había voluntad ciudadana y necesidad partidaria para hacer de las elecciones el ámbito privilegiado de la confrontación nacional. Pero también se manifestó que las elecciones, como habían estado organizadas hasta entonces, ya resultaban ineficaces para articular las exigencias de participación política de la sociedad.

La única manera para que las elecciones —y, después de ellas, los espacios de representación popular, cámaras, asambleas, municipios, etcétera— fueran eficaces sería con reglas para que los partidos compitieran en igualdad

de condiciones; es decir, que existiera un auténtico régimen de partidos políticos.

La preeminencia histórica, nacional, política y social que el PRI había tenido, indiscutiblemente había inhibido la información de ese auténtico sistema partidario. En torno al proceso político del 88 —y antes, en diversos comicios nacionales y regionales—, se comprobó la ineficacia del PRI para representar a toda la sociedad. También se manifestó que, en adelante, ningún partido estaría en condiciones de representar a *toda* la sociedad. La pluralidad de intereses, circunstancias y condiciones que tienden a definir la vida ciudadana en México es el nuevo marco en el que actúan (y tendrían que desenvolverse, al buscar asideros sociales) los partidos políticos.

Eso significa que comiencen a actuar como verdaderos partidos, es decir, como comunidades de intereses políticos articulados en torno a principios —y no sólo alrededor de metas circunstanciales u ocurrencias—, con vida interna activa y estable, así como con presencia pública permanente, no sólo en las coyunturas electorales. Ha sido frecuente que los partidos mexicanos, incluso el PRI, busquen la simpatía ciudadana sólo en vísperas de los comicios locales y nacionales, descuidando a sus clientelas durante el resto del calendario político. También ha sido habitual que los partidos definan sus auténticas decisiones y orientaciones mediante los grupos dirigentes y no por sus reales o hipotéticos afiliados. La existencia de órganos de dirección es consustancial a cualquier agrupación política, pero en escenarios sociales como el que comienza a haber en México, a los partidos les resulta imprescindible apelar, en todo momento, al respaldo de sus socios. Ese es uno de los primeros pasos para tener avales verdaderos en el seno de la sociedad.

El PRI, por su capacidad para gestionar y lograr recursos estatales, pero también como resultado de sus necesidades para mantener clientelas dispuestas a votar por él, y defenderlo, es, entre los partidos mexicanos, el que mayor funcionamiento estable ha tenido. Pero fue evidente que ese partido, que durante la prueba electoral de 1988 estaba en vísperas de su sexagésimo aniversario, se encontraba urgido de renovaciones. Entre otros aspectos, los mismos dirigentes priístas reconocieron que la estructura sectorial (que ubica como pilares del partido de los obreros, campesinos y miembros del difuso sector popular) ya no era suficiente para, ella sola, traducir en participación y en decisiones políticas la diversidad que hay en el propio PRI.

Los partidos de la oposición, con más dificultades y menos recursos, también requerirían procesos de fortalecimiento interno. Acción Nacional había sido el más sólido y perseverante de los partidos de la oposición, pero con dificultades para ganar más consenso del que había disfrutado, debido al carácter impopular de muchas de sus propuestas, e incluso de candidatos como el empresario y terrateniente Clouthier, que murió en un accidente

automovilístico en octubre de 1989. Los partidos del FDN contaban con trayectorias muy diversas; tanto, que esa coalición no funcionó como auténtico frente, sino como esporádica suma de membretes, desperdiciando así la posibilidad de sumar fuerzas y ganar posiciones, por ejemplo en las elecciones de julio en el DF o en otros comicios locales, en donde los partidos que en términos nacionales coincidían con Cárdenas se presentaron desunidos y con candidaturas diferentes. El Partido de la Revolución Democrática, formalmente creado en mayo de 1989, podría ser un más sólido polo articulador de la centro-izquierda. Pero también corría el riesgo de precipitar la dispersión de esas fuerzas, al surgir a partir de un proceso amplio, participativo, público y equitativo para los diversos grupos involucrados en dicho proyecto. El nacimiento del PRD precipitó la desaparición del FDN.

Los partidos han funcionado en México como instituciones políticas habitualmente ajenas a la sociedad. En nuevas circunstancias podría resultar pertinente considerarlos como agrupaciones de interés público, sujetos al escrutinio (entre otros, en aspectos como sus finanzas) de los órganos representativos de la sociedad. Reformas para fortalecer, con mayores recursos y condiciones equitativas, al régimen de partidos serían, así, complementarias a la reforma electoral. Y junto con ambas se ubicaría la reforma política —hasta ahora ausente— de los medios de comunicación.

### *Medios y opinión pública: indispensables actores políticos*

Por primera vez un proceso electoral tuvo como protagonistas, aún secundarios pero ya notables, a los medios de comunicación. Radio y televisión habían sido, antes de 1988, testigos casi siempre mudos y ciegos en las campañas políticas nacionales. El partido gubernamental usaba esos medios para reiterar mensajes e imagen, pero no para persuadir o confrontar. En el 88 siguió existiendo un manejo parcial de los medios, facilitado, en el caso de la televisión, por la pertenencia estatal de la mitad de ellos y por la profesión de fe priísta que el consorcio privado, dueño de la otra mitad, se empeñó en demostrar. Ocurrió, incluso, que el excesivo énfasis en una sola candidatura resultó más dañino que útil para la causa del PRI. Puede asegurarse, sin exageraciones, que a partir del tiempo proporcionado a este partido, la televisión ya había votado antes del 6 de julio. Votó Televisa, con un programa especial que 72 horas antes de los comicios estuvo dedicado a confundir sobre los candidatos y partidos de la oposición. Votó el periodista Jacobo Zabłudovsky desde el 23 de marzo, cuando mostró adhesión priísta de dos presuntos hermanastros de Cuauhtémoc Cárdenas. Votaron productores, guionistas y supervisores de los noticieros de Imevisión, que persistentemente ocultaron

la información de las campañas de la oposición. Votaron los promotores de la consulta telefónica, televisada en cada entidad del país gracias a la cual se pretendía que México hablaría con Carlos Salinas en una costosa parodia de democracia electrónica. Votaron los personajes del mundo artístico que protagonizaron *spots* para manifestar sus simpatías por ese candidato. Lo hicieron también quienes negaron espacios a candidatos de la oposición en docenas de televisoras estatales. Votó la revista *Teleguta*, cuando pocas semanas antes de los comicios obsequió a sus cientos de miles de lectores un ejemplar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... editada por el PRI, y en cuyos forros se mostraba el logotipo del candidato presidencial de ese partido.

Los mensajes subliminales se volvieron obviedades propagandísticas a fuerza de ser inmoderadamente reiterados. Todos aquellos fueron los votos más costosos, y menos redituables, que el partido gubernamental imaginó jamás. Cada exceso de la televisión, cada omisión en perjuicio de otros candidatos, contribuyó al silencioso, publicitariamente modesto, pero políticamente creciente prestigio electoral de otros candidatos, en especial el del Frente Democrático Nacional. Hipotecada buena parte de la campaña priísta a los recursos de la mercadotecnia, se olvidó uno de los principios más elementales de la publicidad mercantil, que también vale para la publicidad política: los mensajes en demasía saturan, en lugar de persuadir; el abuso propagandístico puede revertirse contra sus patrocinadores.

Como hemos visto, la votación del 6 de julio tiene explicaciones complejas, versátiles, y seguramente también interminables. El enfado ante la crisis, la erosión del partido que ha gobernado casi siete décadas, la proliferación de activos movimientos regionales, la presencia de candidatos de oposición personalmente atractivos, y sobre todo depositarios de las tradiciones de la derecha y de la izquierda... pero desde luego los medios de comunicación, y en especial la TV, tuvieron una cuota que será difícil evaluar, pero que fue posible reconocer en las reacciones de los ciudadanos, para definir las decisiones de aquella jornada electoral.

En rigor, los medios conservaron las actitudes paternalistas, las puertas por lo general cerradas a otras opiniones, los compromisos con el poder político, que ya se les conocían. No hubo traición a su propia historia en la decisión de quienes los manejan, para dar la impresión de que la competencia partidaria era casi inexistente. No hubo sorpresas en la previsible abundancia de notas, crónicas, desplegados y adhesiones a la campaña priísta, en comparación con escasas —excepciones que confirmaban la regla— presencias de Clouthier, Cárdenas y, menos aún, Ibarra de Piedra o Magaña en los medios electrónicos. Lo que cambió fue el resto el país, y la mayor parte de los medios de información se quedaron rezagados respecto a sus nuevas realidades; no

estaban preparados para reflejar a ese renovado país en proceso de transición política. La política dejó de ser secreto y los medios se empeñaban en mantenerla al margen del interés público.

Si las elecciones del 88 tuvieran que ser reconstruidas a partir de las videocintas de los noticieros nacionales de la televisión mexicana, habría una versión parcial e insuficiente. Durante todo el primer semestre de 1988 los partidos de oposición reclamaron, con tonos y métodos de presión muy variados, ante lo que consideraban inequidad de la televisión privada y gubernamental en la cobertura de sus actividades. La protesta más eficaz fue la de Manuel J. Clouthier, pues aunque su boicoteo al noticiero *24 Horas* no tuvo una respuesta social sensible, el consorcio Televisa, a partir de reclamos como éste, amplió ligeramente su atención a las campañas de oposición, como puede verse páginas adelante, en este libro.

En la radio pudo apreciarse una mayor apertura. Todos los candidatos presidenciales comparecieron en los cuatro o cinco principales espacios de la nueva experiencia de comunicación que, en la ciudad de México, son algunos noticieros matutinos. Aunque matizados por las preferencias personales de sus conductores, noticieros como los de Radio Red o Estéreo Rey, con retransmisoras en el interior del país, se comportaron con mayor flexibilidad que el resto de la radio e, indudablemente, con amplitud política audaz si se les comparaba con la televisión. La radio y la TV en provincia, con difusión más restringida, fueron más receptivas a intereses de grupos locales, de tal manera que, a menudo, abrieron espacios a candidatos presidenciales de la oposición. En radiodifusoras del interior, ya fuese porque se trataba de emisoras universitarias, culturales o de propietarios en lo político más plurales (e incluso de empresarios locales ligados con partidos de oposición) partidos como el PAN o el PARM tuvieron una presencia más constante. En todo caso puede asegurarse que las campañas presidenciales desplazaron, en la atención de los medios, a las de carácter local, por diputaciones o senadurías. Una excepción la protagonizó Javier Livas, candidato del PARM en Monterrey, quien produjo diez horas de televisión que fueron transmitidas a través del satélite estadounidense Wester 4 (se estima que en la zona conurbada de Monterrey hay unas 20 mil antenas parabólicas, con lo cual esa región es, muy probablemente, la que concentre una mayor cantidad de esos platos, para recepción directa de satélite, en todo el mundo). Acción Nacional hizo algo similar en la capital neoleonesa.

La prensa fue territorio abierto, en comparación con los medios electrónicos, aunque los espacios de auténtica pluralidad resultaron en realidad pocos. De por lo menos 22 diarios que entonces se editaban en la ciudad de México, únicamente cuatro cubrieron de manera regular todas las campañas

presidenciales. El peso de estas informaciones, junto con sus enormes diferencias, se examina más adelante.

A través de algunos medios, más los escritos que los electrónicos, los partidos políticos se expresaron ante los ciudadanos. Incluso, casi podría decirse que hubo un incipiente debate, no siempre claro, pero sí revelador, en las declaraciones y respuestas que los candidatos presidenciales hacían saber a través de los medios. En algunos de ellos, varios candidatos presidenciales participaron en forma activa como articulistas, entrevistados frecuentes, o como promotores de manifiestos, en el caso de la prensa escrita.

Con todo y las restricciones señaladas, en los medios de información aparecieron mensajes, imágenes y posiciones —incluso con toda la pobreza de algunas de ellas— a partir de los cuales los electores pudieron definir sus votos. En 1988 los medios fueron infieles, pero, por primera vez, importante fuente de información política en un proceso electoral mexicano.

Los ciudadanos, por su parte, en su gran mayoría se reservaron la posibilidad de expresarse hasta el preciso día de las elecciones. Allí pudieron desfogarse reclamos por mucho tiempo contenidos y confrontarse nuevos alineamientos políticos nacionales.

Con distorsiones y también inexactitudes, paralelamente a la información buscada o aceptada por los medios apareció un actor ligado a ellos: las encuestas de opinión. Sobre la validez de estos instrumentos para medir el estado de ánimo político de la sociedad, ha existido una inagotada discusión en otras partes del mundo. En México, en 1988, también por primera vez se realizaron encuestas con importancia política y el relativa exactitud científica. Las encuestas fueron el recurso de algunas instituciones académicas, así como de algunos medios de información, para buscar una evaluación original, atractiva, del proceso electoral de julio. Antes de las elecciones sirvieron para medir posibles respuestas ciudadanas a las convocatorias partidarias, y también, en algunos casos, fueron utilizadas por los propios partidos para anticipar triunfos o denunciar eventuales manipulaciones. Ocurrió, por ejemplo, que ante el pronóstico del triunfo priísta a escala nacional, el FDN y el PAN dijeran que quienes así lo auguraban eran encuestadores y analistas movidos por intereses económicos o presiones políticas. Después de los comicios, las pocas encuestas que se emprendieron resultaron insuficientes para corroborar —salvo en el caso de la ciudad de México— la validez o inexactitud de los datos oficiales.

Refutadas y desafiadas, las encuestas fueron siempre atendidas por el mundo político. Por su novedad, y por el descuido con que habitualmente eran analizadas, muchas de ellas fueron asumidas más como dogmas —refutables o compartibles sólo desde el campo de la ideología— que como

instrumentos científicos —y en tal sentido susceptibles de ser cuestionadas en su metodología más que en sus intenciones— para evaluar la opinión social.

Como quiera que sea, las encuestas vinieron a llenar —sólo de manera parcial— un hueco que resultaba cada vez más sensible en los medios de comunicación y en el debate político mexicanos. Gracias a ellas hubo, en principio —sólo en principio— una indirecta pero novedosa presencia de la sociedad en el proceso electoral. Existió opinión de los ciudadanos, así ésta se encontrara simplemente traducida en generalizables y despersonalizadas cifras. Los porcentajes no sustituyen a la presencia social, e incluso no son del todo confiables para anticipar las actitudes políticas de conglomerados sociales dinámicos, influenciables, pero también con capacidad para sortear presiones de diversa índole. Así se demostró, en 1988, en el caso mexicano. Las encuestas ofrecieron una pálida idea de cómo y hacia dónde se manifestaría el electorado. Fue una imagen insuficiente, discutible y limitada. Pero se trató, al fin, de una presencia que contrastaba con los muchos vacíos de participación social en los medios de comunicación, así como con los abundantes autoritarismos que pudieron advertirse en las campañas de los partidos políticos. Esa presencia de la opinión pública —y damos por descontado que el mismo término amerita una discusión más extensa— fue otra de las novedades en torno a las elecciones de 1988.

Muchas cosas tendrían que cambiar a partir de la evaluación que se hiciera del proceso electoral de aquel año. Los partidos —y la sociedad, con ellos— podrían demandar que, por lo menos, medios impresos y electrónicos de información les destinaran, en tiempos de campaña, espacios equivalentes a los porcentajes de votación que han obtenido en comicios anteriores. A tal discusión, quizá puedan contribuir los ensayos que aparecen en el resto de este volumen.